



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI.  
SALA LABORAL**

**AUDIENCIA NÚMERO 214**

Decisión

Santiago de Cali, uno (1) de octubre de dos mil veinte  
(2020).

El Magistrado Ponente **CARLOS ALBERTO OLIVER GALE**, en asocio de los magistrados que integran la Sala de Decisión, **MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO** y **LUIS GABRIEL MORENO LOVERA**, proceden a dictar el siguiente

**AUTO INTERLOCUTORIO N° 098**

**Aprobado en Acta N° 058**

**MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS ALBERTO OLIVER GALE**

Le corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra el Auto Interlocutorio N° 5530 del 15 de octubre del año 2019, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, dentro del proceso Ordinario propuesto por el señor **FANOR PEREA RAMÍREZ** contra la entidad **ECOPETROL S.A.**, a través del cual el Juzgado decidió, Declarar no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, propuesta por Ecopetrol S.A.; y Declarar probada la excepción de pleito pendiente y, en consecuencia, suspender el presente proceso, hasta tanto no exista sentencia ejecutoriada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por el señor Fanor Perea Ramírez contra Ecopetrol S.A., que cursa actualmente ante el Consejo de Estado, bajo la radicación 76001-23-33-005-2014-01047-00.



## ANTECEDENTES

Pretende el señor Fanor Perea Ramírez que se Ordene a la entidad demandada a Reintegrar al actor al cargo de operador de fluidos que venía desempeñando al momento del despido, en las mismas condiciones laborales, o a otro de igual o superior categoría y remuneración, sin solución de continuidad en la relación laboral; a Pagar al actor los salarios dejados de percibir desde su retiro el 28 de mayo del año 2012, hasta la fecha de su reintegro, con los incrementos legales y convencionales; el Pago de las prestaciones legales y convencionales compatibles con el reintegro, como son cesantía, intereses de cesantía, primas y demás extralegales que resulten demostradas; el Pago de los aportes a seguridad social; los Perjuicios sufridos por el despido, incluyendo los perjuicios morales; el reajuste de las sumas; los Intereses legales que correspondan; Costas y Agencias en derecho.

Admitida la demanda por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, la entidad **Ecopetrol S.A.** (folio 726 y ss.) contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo como excepción previa, la que denominó Falta de jurisdicción y competencia - Pleito pendiente, indicando concretamente que lo que se pretende es dejar sin efecto los fallos proferidos por la oficina de control disciplinario de la demandada, pero que esta se encuentra facultada para conocer de los procesos disciplinarios referentes a sus servidores públicos, manifestando que los fallos proferidos por aquella son actuaciones administrativas y, en consecuencia, es la justicia contenciosa administrativa la competente para definir su legalidad; refiriendo además, que tal situación era conocida por el demandante, quien inició proceso administrativo que cursó ante el Tribunal Administrativo del Valle, en sede de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo el reintegro a su cargo y los reconocimientos remuneratorios e indemnizatorios deprecados, siendo proferida sentencia de primera instancia y se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado.

## DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA



El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, mediante Auto Interlocutorio N° 5530 del 15 de octubre del año 2019, resolvió Declarar no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, propuesta por Ecopetrol S.A.; y Declarar probada la excepción de pleito pendiente y, en consecuencia, suspender el presente proceso, hasta tanto no exista sentencia ejecutoriada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por el señor Fanor Perea Ramírez contra Ecopetrol S.A., que cursa actualmente ante el Consejo de Estado, bajo la radicación 76001-23-33-005-2014-01047-00.

### RECURSO QUE SE ESTUDIA

Inconforme con lo resuelto en primera instancia, el apoderado judicial del demandante, señor **Fanor Perea Ramírez**, presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio N° 5530, manifestando concretamente que el pleito pendiente hace alusión hasta que exista un proceso en curso, con las mismas pretensiones, las mismas partes y, los mismos hechos. Además, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que se requiere que la pretensión debatida en las dos causas sea la misma, es decir, que la decisión de los fallos produzca la excepción de cosa juzgada en el otro, porque se trata de idénticas controversias.

Que en el presente caso no se tratan de las mismas partes, pues si bien se trata en ambos casos del señor Fanor Perea Ramírez, en el proceso laboral también puede hacerse parte la organización sindical, toda vez que el Código Sustantivo del Trabajo indica que, en caso de violación de la Convención Colectiva de Trabajo, puede hacerse parte la organización sindical y el trabajador, siendo en este caso la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo; refiriendo que en el presente proceso se busca la aplicación de esta, mientras que en el proceso administrativo se busca la nulidad de unos actos administrativos.



Como segundo argumento, refiere sobre los hechos, son totalmente diferentes, pues en la jurisdicción ordinaria se indica que el actor estuvo incurso en un proceso penal, del cual fue absuelto, y que, por consiguiente, dice la Convención Colectiva de Trabajo que debe ser reintegrado; en cambio, en el proceso de la jurisdicción contencioso administrativa, lo que se está debatiendo es si se cumplió con el debido proceso, y si unos actos administrativos dictados por Ecopetrol violan ese debido proceso, que no tiene nada que ver con la aplicación de la convención colectiva, de tal manera que si se da que la sanción que se le impuso, los actos administrativos violaron los derechos del señor Fanor, entonces esos tendrá sus consecuencias, que será la jurisdicción contencioso administrativa quien lo determine.

Finalmente, sobre las pretensiones, indica que también son totalmente diferentes, con base en los hechos y a la causa del derecho, que es la Convención Colectiva de Trabajo, estamos que el señor Fanor estuvo incurso en un derecho penal, denunciado por fiscalía y por Ecopetrol, como parte civil, siendo absuelto, por lo que, con base a la convención colectiva, se ordena el reintegro; mientras que allá la jurisdicción contencioso administrativa, las causas son totalmente diferentes, siendo una violación de carácter constitucional que hace Ecopetrol, por lo cual considera que deben ser derogadas por las autoridades competentes.

Por su parte, la apoderada judicial de la entidad demandada, **Ecopetrol S.A.**, presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, inicialmente frente a la negativa de declarar probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, y frente a la decisión de suspender el proceso, indicando concretamente que se considera que es clara y evidente que la pretensión del proceso es buscar el reintegro, asociado a la nulidad del proceso disciplinario.

El hecho de que dentro del proceso se mencionen y se enuncien dentro de sus consideraciones fácticas la existencia de un proceso penal y la decisión de preclusión por vencimiento de términos, no por absolucón,



simplemente se hace referencia, a una de las consideraciones o de los estados que fluyó el proceso del aquí demandante, sin embargo, es claro que la razón por la cual se tomó la decisión de destitución, partió de un proceso, en el marco de la ley, en su momento el Código Disciplinario Único, lo que quiere decir que es ese proceso, y solamente dentro de ese proceso, en el cual se tomó esa decisión, no en el marco de la convención colectiva, ni dentro del proceso penal a que se hace referencia.

Es decir, solamente dentro del marco de la decisión del contencioso administrativo, frente al proceso disciplinario adelantado, en virtud de la calidad de servidor público de los trabajadores de Ecopetrol, se adelantó dicha norma.

En ese sentido, si la decisión corresponde a buscar un reintegro, tratando por esta jurisdicción anular la decisión asumida dentro del proceso disciplinario, esa sería la razón por la cual no puede darse aplicación a la convención colectiva, pues esta no puede desconocer la aplicación de la Ley 734, porque son dos regulaciones completamente diferentes.

En ese sentido, la excepción de falta de jurisdicción y competencia se funda en que el proceso actualmente está adelantándose para buscar un reintegro derivado de una decisión de la Ley 734, y no de la aplicación de la convención colectiva, por lo cual la decisión corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

En lo que atiene a la excepción de pleito pendiente, considera que si bien lo que se ha buscado es adecuar una pretensión para la jurisdicción ordinaria laboral dentro del proceso que se adelanta, pero se verifican las pretensiones del proceso administrativo, es claro que las partes son idénticas en ambos procesos, y el objetivo primordial, que es el reintegro derivado de buscar una anulación o desconocimiento de las decisiones asumidas dentro del marco del proceso disciplinario adelantado dentro de la Ley 734 del año 2002, son exactamente las mismas.



Que, en consecuencia, considera que la decisión de dicha declaración, debe ser la terminación y no la de suspensión, considerando que es solamente la jurisdicción contencioso-administrativa la que puede tomar la decisión de reintegro; porque, en el evento de que se decretara la nulidad de los actos administrativos tomados en el marco de la aplicación de la Ley 734, sería el reintegro dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa y no la jurisdicción laboral, como se pretende.

Las partes presentaron alegatos de conclusión que se circunscribe a lo debatido en primera instancia.

### **CONSIDERACIONES**

Corresponde a esta Sala decidir respecto de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, **(i)** pretendiendo concretamente el del demandante que se declare no probada la excepción previa de pleito pendiente, **(ii)** mientras que el de la entidad demandada busca que se declare probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia y, como consecuencia, se ordene la terminación del proceso.

Con el fin de resolver los recursos propuestos, debe la Sala indicar que ambas son excepciones determinadas como previas de forma taxativa en el artículo 100 del Código General del Proceso, específicamente en sus numerales 1° y 8°

Ahora, frente al tema del pleito pendiente, y su diferenciación respecto de la suspensión del proceso por prejudicialidad, tal situación se ha decantado en forma clara por la jurisprudencia nacional, por lo cual debe indicarse que, para la configuración del primero de estos conceptos, basta que exista un proceso con las mismas partes, hechos y pretensiones para que sea procedente, con el fin de evitar sentencias contradictorias frente a iguales aspiraciones; mientras que en lo relativo a la suspensión, esta procede por cuanto la decisión que debe tomarse en un asunto depende de la que debe adoptarse en



otro, por lo que la decisión se paraliza hasta que se resuelva aquel proceso que tiene incidencia directa y necesaria sobre el fallo que se va a dictar.

Decantado lo anterior, comporta indicar que, para el presente caso, no resulta posible declarar probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, en tanto que, de conformidad con lo planteado en el artículo 2° del C. P. del T. y de la S. S., específicamente en su numeral 1°, *“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.”*

Si nos detenemos en las pretensiones del presente demanda, se circunscriben en forma concreta a que se ordene a Ecopetrol S.A. a reintegrar al señor Fanor Perea Ramírez al cargo que ocupaba, junto con el pago de las prestaciones dejadas de percibir por la destitución del trabajador, esto en aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo; por lo cual se puede ver que se trata de una situación que se deriva directamente del contrato de trabajo y, por ende, es la jurisdicción ordinaria laboral la competente para su definición.

Ahora, a fin de resolver la solicitud de la parte demandante, debe manifestarse que, aun cuando se considera que es la jurisdicción ordinaria laboral la competente para resolver sobre la posibilidad de aplicar o no la Convención Colectiva de Trabajo en este caso, lo cierto es que no se configura un pleito pendiente.

Para dar claridad a lo manifestado es preciso recordar que, para que proceda el pleito pendiente se hace necesaria la identidad de partes, hechos y pretensiones en ambos procesos, aun cuando existan ligeras diferencias; con lo cual, vemos que se presenta identidad de partes, en tanto que tanto en el proceso que nos ocupa, como en el proceso que cursa en la jurisdicción contencioso administrativa, y se encuentra actualmente en el Consejo de Estado por apelación, se presentan como demandante el señor Fanor Perea Ramírez y como demandada la entidad Ecopetrol S.A.



Es preciso aclarar que, contrario a lo dicho por el recurrente en su sustentación, no por el hecho de que en el proceso ordinario se pueda hacer presente la entidad sindical, se descarta la identidad de partes, amén de que, no se observa que en el proceso se hubiera vinculado al sindicado.

Es cierto que, existen muchos hechos idénticos en ambos procesos a comparar, en tanto que, si nos remitimos a lo narrado en el proceso ordinario laboral, se hace un recuento histórico de la situación suscitada en el proceso disciplinario que se llevó a cabo en contra del hoy demandante, y que concluyó con su destitución, siendo estos concordantes con los expresados en demanda interpuesta ante la jurisdicción contencioso administrativa, sirviendo tal situación como fundamento de las pretensiones de ambos procesos judiciales, sin embargo, en el proceso laboral se agrega un hecho nuevo como lo es el atinente a que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, mediante auto de 19 de septiembre de 2017, resuelve declarar la preclusión del proceso penal en virtud de la prescripción y cesar con efectos de cosa juzgada la actuación judicial adelantada, hecho trascendental que permite descartar la identidad procesal fáctica que venimos estudiando.

Finalmente, no existe identidad de pretensiones, en tanto que, si bien en el proceso contencioso administrativo se solicita que sea declarada la nulidad de los actos administrativos emitidos dentro del proceso disciplinario en contra del hoy actor, en el presente asunto solicita el reintegro del demandante.

Nótese que una de las pretensiones consecuenciales de la nulidad de los actos administrativos controvertidos es la solicitud a título de restablecimiento del derecho, es el reintegro del señor Fanor Perea Ramírez al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría, pero ello, no hace variar la decisión.





Existen pretensiones consecuenciales idénticas como pago de los derechos prestacionales a que haya lugar, lo cual es intrascendente porque dependen de pretensiones principales diferentes; pretensiones últimas que resultan idénticas a las planteadas en el presente proceso ordinario.

Es pertinente anotar que, no estamos en la oportunidad procesal de dilucidar si hay lugar o no a la suspensión del proceso por prejudicialidad, pues, tal decisión se toma por el juez de segunda o de única instancia al momento de dictar sentencia (art. 162 CGP).

Así las cosas, se revocará el auto el numeral segundo del auto apelado No 5530 de 15 de octubre de 2019, y en su lugar, se declarará no probada la excepción de pleito pendiente. Se confirmará la providencia apelada en lo demás.

Costas en instancia a cargo de la demandada. Agencias en derecho en segunda instancia \$400.000.oo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** el numeral segundo del Auto Interlocutorio N° 5530 del 15 de octubre del año 2019, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar, **DECLARAR** no probada la excepción de pleito pendiente. En consecuencia, se deja sin efecto la suspensión del proceso. **CONFIRMAR** dicha providencia en lo demás.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Agencias en derecho en segunda instancia \$400.000.oo.



**TERCERO: DEVUÉLVASE** el presente expediente al juzgado de origen, Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, para lo de su competencia.

**NOTIFÍQUESE POR ESTADO VIRTUAL.**

Se firma por los integrantes de Sala,

**CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ**

Art. 11 Dec. 491/28-03-2020

**MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO**

**LUIS GABRIEL MORENO LOVERA**

Firmado Por:

**CARLOS ALBERTO OLIVER GALE**

**MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL**

**Despacho 005 De La Sala Laboral Del Tribunal Superior De Cali**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**c5ea25430a6ebc8fc2509ed5ad5f3e8300ddcf4383bea774dfa8f27d703e5a2d**

Documento generado en 01/10/2020 10:39:25 a.m.